

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Grecia ha concluido el año con la previsión de una serie de nuevos impuestos, con los que el Gobierno de Alexis Tsipras intenta cuadrar sus presupuestos para alcanzar así los objetivos fijados en el tercer rescate, aun sin saber aun cuándo podrá cobrar el próximo tramo de la ayuda. Se trata de medidas que van desde la reducción del ingreso mínimo exento de impuestos, pasando por el aumento de los tipos del IRPF, hasta el incremento de una serie de impuestos indirectos, y la creación de nuevos.

Con estos incrementos de impuestos directos e indirectos, el Estado espera recaudar 2.447 millones de euros adicionales y el Gobierno espera poder alcanzar en 2017 un superávit primario superior al 1,75% del producto interior bruto (PIB).

Además, espera sentar las bases para que en 2018 el superávit primario alcance el 3,5% del PIB fijado como objetivo en el tercer rescate, firmado en verano de 2015. Según los expertos, sin embargo, el incremento de la imposición ya extremadamente alta puede afectar negativamente a las previsiones económicas del Gobierno para el año que empieza, de un 2,7%.

Todo esto ocurre en un contexto de extrema incertidumbre, pues no solo se cuestiona el objetivo de crecimiento económico, sino que tampoco está claro cuándo podrá contar Grecia con el próximo tramo del rescate, por valor de 6.100 millones de euros.

El Gobierno ha despedido el año pidiendo perdón a los acreedores por haber decidido sin previa consulta abonar una paga extraordinaria a los pensionistas más pobres y aplazar el incremento del IVA en las islas del mar Egeo golpeadas por la crisis de refugiados. Tsipras lo había anunciado en un mensaje televisado, en un momento de elevada tensión entre los acreedores sobre la segunda revisión del programa asociado al rescate.

Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI), que todavía sigue sin decidir si se suma al tercer rescate, considera que los objetivos para el superávit primario de Grecia a medio plazo son demasiado ambiciosos (3,5% del PIB a partir de 2018), los acreedores europeos lo ven factible.

El FMI considera que Grecia solo puede cumplir con un objetivo tan ambicioso si asume medidas de recorte e ingresos adicionales por algo más de 4.000 millones de euros, sobre todo mediante un nuevo tijeretazo a las pensiones.

Aunque Grecia comparte la visión del FMI de que el objetivo para el superávit primario (que excluye el pago de los intereses de la deuda) es demasiado elevado, porque anula toda posibilidad de insuflar vida a la maltrecha economía, no está dispuesta a asumir aún más recortes, y ante la duda, prefiere dejar al Fondo fuera del rescate.

El año finaliza pues sin resolverse si Grecia logra el aprobado de los acreedores para esta segunda revisión, habiendo una serie de diferencias pendientes, entre ellas, en materia laboral.

El 21 de diciembre, el Parlamento griego aprobó por unanimidad el aplazamiento por un año la subida del IVA en las islas griegas golpeadas por la crisis de refugiados, una de las dos medidas anunciadas por el primer ministro, Alexis Tsipras, que soliviantó a los acreedores por no haber sido consultados previamente.

El anuncio de esta medida, junto con la paga extra a los pensionistas más pobres que aprobó el Parlamento la semana anterior, condujo a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) congelara las medidas de alivio de la deuda griega a corto plazo aprobadas en el Eurogrupo del 5 de diciembre.

Tsipras defendió sus decisiones con el argumento de que sufragará estas medidas sociales con parte de los excedentes acumulados este año en el erario y afirmó que el reparto de este superávit es asunto “soberano” de Grecia.

Los contribuyentes que tienen previsto legalizar su situación fiscal y declarar ingresos de años anteriores, podrán hacerlo pagando un impuesto de entre el 60% y el 70% de la cuantía no declarada en su debido momento.

La intención inicial del Gobierno era aplicar a los “arrepentidos” una tarifa del 50%, pero los acreedores la calificaron de demasiado clemente.

Tsipras también recalcó que su Gobierno no aceptará que se “excluya a Grecia del modelo social europeo de negociación colectiva”, dentro de las conversaciones que mantiene Atenas con sus socios para cerrar la segunda revisión de las condiciones del programa de rescate.

Las cuatro instituciones acreedoras (Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Banco Central Europeo), si bien asegurando que las medidas adoptadas unilateralmente por Grecia para dar una paga adicional a los pensionistas con menos recursos no afectarán al cumplimiento de los objetivos fiscales que el país debe respetar este año, mostraron, sin embargo, su malestar por el modo en que la decisión ha sido tomada unilateralmente por el Gobierno liderado por Alexis Tsipras, explicaron a Efe fuentes europeas.

Situación económica

En su séptimo año de crisis y tras haber firmado su tercer rescate, Grecia continua sin despegar económicamente, atrapada en la espiral de las reformas y con una sociedad asfixiada por los incesantes recortes y desencantada con las promesas de Tsipras.

Los optimistas, no obstante, podrían interpretar 2016 como un vaso medio lleno. De todas formas, parece haber espacio para cierto optimismo, considerando que, tras la caída económica registrada en 2015, el año de las dobles elecciones y del triunfo de Syriza, el año recién terminado ha dejado algunas cifras positivas: el paro ha

seguido reduciéndose, de un récord del 26% en 2014, hasta el 23,4% en agosto pasado; el índice de la producción industrial ha remontado en los primeros nueve meses (hasta el 1,8%) y el PIB se ha incrementado ligeramente en el segundo (0,3%) y tercer trimestre (0,8%).

Todo esto ha ocurrido a pesar de que los controles de capital introducidos en verano de 2015 aún siguen vigentes.

Sin embargo algunos observadores se la evolución del turismo, el principal motor de la economía helena. Si bien las llegadas aumentaron en los primeros nueve meses en un 3,5%, la facturación se redujo un 5,5%.

Incluso las cifras del paro permiten una segunda interpretación: gran parte de la reducción del desempleo se debió al fuerte aumento del trabajo a tiempo parcial, lo que se traduce en salarios de 400 euros al mes -o incluso menos- que no alcanzan para llegar a fin de mes.

2016 fue además, por enésima vez, año de recortes y aumento de impuestos.

El IVA volvió a aumentar, del 23% al 24%, lo hizo también el impuesto sobre la renta, y lo hicieron nuevamente las cotizaciones a la seguridad social.

Al mismo tiempo volvieron a bajar las pensiones, que acumulan ya una docena de caídas en los siete años de crisis.

Todo esto ha conducido a que los griegos se vean cada vez más asfixiados en su economía doméstica y que la deuda privada haya alcanzado el mismo nivel que la pública, unos 328.000 millones de euros.

Si bien uno de los principales objetivos del Gobierno de Tsipras era combatir el fraude fiscal, una de las grandes lacras del país, esta creciente presión tributaria está produciendo el efecto contrario, un problema no solo para las arcas del Estado sino para las carteras de los bancos.

En torno a la mitad de los créditos bancarios están en mora (antes del comienzo de la crisis tan solo era el 4,8%), en su mayor parte porque la gente ya no puede apretarse más el cinturón, siendo residual el porcentaje de los que se aprovechan de la situación y no pagan aunque pudieran hacerlo

Entre que los ciudadanos deben a los bancos y al Estado y el Estado les debe a ellos -hay retrasos en el pago de pensiones, en la devolución de impuestos, deudas a proveedores... que suman un total de 8.000 millones de euros- la economía no obtiene la liquidez que necesitaría para poder arrancar.

Unos fondos que tampoco llegan de fuera, pues la falta de inversiones extranjeras, que tanto anhela el Gobierno, no se ve factible mientras Grecia no vuelva a los mercados financieros.

Para romper este círculo, insistió el Gobierno durante este año, es necesaria una decisión sobre la reestructuración de la deuda, no solo a corto, sino a medio y largo plazo.

El Gobierno se cansa de advertir de que si no vuelve la inversión a Grecia, el país no puede salir de la crisis y de la trampa de los rescates, y la ciudadanía terminará de dar la espalda a los políticos. Temor que parece justificado por la encuesta elaborada en otoño por Public Issue, publicada nada menos que por el diario de Syriza, "Avyí", según la cual el 90% de los encuestados dice sentirse insatisfecho con el trabajo del Gobierno. Sin olvidar que un 80% dice lo mismo de la oposición.

El día 11 el Parlamento aprobó los Presupuestos Generales de 2017, que prevén la vuelta del país al crecimiento tras siete años de recesión, pero incluyen también nuevas medidas de ahorro e incrementos de impuestos.

La ley salió adelante con los votos de la coalición gubernamental del izquierdista Syriza y los nacionalistas Griegos Independientes y contó con el rechazo de toda la oposición.

En su discurso de clausura tras cinco días de debate, el primer ministro, Alexis Tsipras, afirmó que el de 2017 es el primer presupuesto del "optimismo" y el "crecimiento económico", en alusión al 2,7% de incremento del PIB previsto por el Gobierno.

Pese a incluir nuevos recortes y subidas de impuestos, Tsipras insistió en que los presupuestos tienen un claro acento social, y puso como ejemplo los 300 millones de euros (317 millones de dólares) adicionales que se destinarán a sanidad y educación.

Con una oposición conservadora que no se cansa de pedir elecciones ante la caída de popularidad del Gobierno y con las negociaciones con los acreedores sobre la revisión del programa asociado al rescate aún sin concluir, Tsipras ha optado por recuperar el discurso social.

El Gobierno parece querer demostrar que no solo cumple sino incluso supera las pautas impuestas por los acreedores. Así, los presupuestos de 2017 parten de un superávit primario (antes del pago del servicio de la deuda) del 2% del producto interior bruto (PIB), un cuarto de punto por encima del objetivo acordado con los acreedores.

Ya en este año, el Ejecutivo espera superar con creces el objetivo pactado con las instituciones acreedores, y cerrar el ejercicio en curso con un superávit primario del 1,1%, casi el doble del 0,6% acordado.

El incremento de los ingresos del Estado en el periodo enero a noviembre en un 5,8% por encima de lo presupuestado fortalece el optimismo gubernamental.

Los presupuestos de 2017 contemplan un incremento de ingresos del 5,3% hasta un total de 51.001 millones de euros (54.000 millones de dólares), y un recorte del gasto del 3,1% hasta los 48.486 millones de euros (51.338).

En total están previstas medidas de aumento de ingresos y de recorte de gastos de unos 3.400 millones de euros (3.600 millones de dólares), 2.500 (2.647) de los cuales vendrán de aumentos de impuestos.

Entre las medidas que elevarán la presión fiscal figuran el incremento de una serie de impuestos indirectos, van desde el combustible para la calefacción y la gasolina hasta el tabaco, el café, el internet y la televisión de pago.

Además el Estado heleno espera ahorrar 843 millones de euros (892 millones de dólares) a base de nuevos recortes en el gasto de pensiones y de prestaciones sociales, así como del aumento de las contribuciones a la seguridad social.

Pero al mismo tiempo los presupuestos prevén un aumento del gasto social por un total 871 millones de euros (922 millones de dólares).

Los presupuestos se han confeccionado sobre una base de cálculo que parte de un crecimiento del PIB del 2,7%, tras un previsible 0,3% en este ejercicio, un objetivo que muchos analistas consideran demasiado optimista, pero que el Gobierno espera lograr gracias a un incremento de las inversiones de un 9,1%; del consumo privado, de un 1,8%, y de las exportaciones, de un 5,3%.

El Gobierno prevé además una tímida vuelta a la inflación tras años de deflación, con un incremento del IPC del 0,6%.

Además, cuenta con una reducción del desempleo del 23,7 al 22,6 por ciento.

Situación social

Como se ha mencionado en la sección sobre situación política, a primeros de mes el Primer Ministro Alex Tsipras, había anunciado el reparto de 617 millones de euros, como paga extra a 1,6 millones de pensionistas que ganan menos de 850 euros al mes. El primer ministro heleno aseguró que el dinero procede del superávit de 2016, que prevé llegue los 1.907 millones de euros en lugar de los 919 millones estimados anteriormente.

Las asociaciones griegas de pensionistas han acogido con indignación el anuncio del Primer Ministro. El presidente de la federación de asalariados jubilados, Dimos Kuburis, calificó la promesa de Tsipras de “migajas” que solo son una “venda para tapar los ojos” y encubrir el “saqueo” que ha hecho el Gobierno izquierdista a las pensiones, siguiendo el ejemplo de los Ejecutivos precedentes.

Con críticas similares reaccionó también el presidente de la federación de autónomos jubilados, Pantelís Tatsis, quien afirmó que las promesas de Tsipras no cubren ni de lejos todo lo que se les quitó a los pensionistas.

Las citadas asociaciones convocaron a una manifestación para el 15 de diciembre en el centro de Atenas, desde donde han marchado hasta la sede del Gobierno

Por su parte, el director del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, declaró, a mediados de mes, que Grecia está de regreso en la senda

correcta, pero expresó sus dudas ante los anuncios realizados por el Gobierno sin consulta previa.

En un discurso en Helsinki, Regling repasó la evolución griega y consideró que ese país podrá volver al mercado de deuda antes de que concluya el último rescate, en agosto de 2018, “siempre que ponga en marchas las necesarias reformas”.

El director del MEDE se mostró optimista sin olvidar los desafíos a los que se enfrenta el proyecto europeo y que exigen, a su juicio, mayor integración y compartir los riesgos en la eurozona, a través de mecanismos fiscales o en los mercados de capitales.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que gestionan el rescate a Grecia, decidieron suspender temporalmente las medidas de alivio de la deuda helena a corto plazo, tras la decisión del Gobierno de Atenas de emplear fondos adicionales para pagar pensiones.

Ambos organismos necesitan tomar ciertas “decisiones formales” sobre la implementación de las medidas de alivio de la deuda helena a corto plazo, que fueron acordadas por los países de la eurozona el pasado 5 de diciembre en el marco del tercer rescate financiero al país.

El Gobierno sorprendió con el anuncio de los 617 millones de euros a destinar a una paga extra para los 1,6 millones de pensionistas que cobran menos de 850 euros al mes. Los acreedores desconocían esta iniciativa, ya que el Gobierno de Atenas no les había informado antes de adoptar estas medidas fiscales, contrariamente a lo que dicta el memorando de entendimiento del rescate.

Las medidas de alivio a corto plazo acordadas por los países del euro prevén extender los vencimientos de los bonos desde los 28 años actuales a 32,5 años, “reducir el riesgo de los tipos de interés sin incurrir en costes adicionales para los países que antes tenían programas” de rescate y dar más margen a Grecia en términos de los intereses en la devolución de parte del segundo rescate.

El alivio de la deuda griega es un requisito exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para participar financieramente en el rescate, al que ahora solo presta apoyo técnico.

El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, declaró por su parte que piensa que la paga extra a los jubilados “se encuentra dentro del marco del memorándum, y creo que cuando se proporcionen las explicaciones necesarias se entenderá. Tsipras, por su parte, aseguró que la decisión es puntual, no recurrente y no amenaza el cumplimiento de los objetivos fiscales que debe alcanzar Atenas.

Tsipras recalcó que Grecia está “cumpliendo” con los compromisos que asumió en su tercer programa de rescate de hasta 86.000 millones de euros y cargó contra el FMI, otra de las instituciones acreedoras, a la que espetó que es “antidemocrático” exigir a los griegos que asuman más medidas de austeridad.

En concreto, se pide al país que mantenga un superávit del 3,5% del PIB en 2018 y en años sucesivos, algo que el FMI considera inalcanzable, por lo que exige que Atenas asuma y aplique antes de esa fecha nuevos ajustes.
